

47ª REUNION — Continuación de la 1ª SESION ORDINARIA
DE PRORROGA — OCTUBRE 15 Y 16 DE 1986

Presidencia de los señores diputados Juan Carlos Pugliese
y Roberto Pascual Silva

Secretarios: doctor Carlos Alberto Bravo y señor Carlos Alberto Béjar

Prosecretarios: señores Hugo Belnicoff y Ramón Eladio Naveiro

DIPUTADOS PRESENTES:

ABDALA, Oscar Tupic
AGUILAR, Ramón Rosa
ALAGIA, Ricardo Alberto
ALDERETE, Carlos Alberto
ALENDE, Oscar Eduardo
ALSOGARAY, Álvaro Carlos
ALSOGARAY, María Julia
ALTERACH, Miguel Ángel
ALLEGRONE de FONTE, Norma
ARABOLAZA, Marcelo Miguel
ARAMBURU, José Pedro
ARRECHEA, Ramón Rosaura
ARSÓN, Héctor Roberto
AUSTERLITZ, Federico
AUYERO, Carlos
AVALOS, Ignacio Joaquín
AZCONA, Vicente Manuel
BAGLINI, Raúl Eduardo
BAKIRDJIAN, Isidro Roberto
BARBEITO, Juan Carlos
BELLARRINAGA, Juan Bautista
BELLO, Carlos
BERCOVICH RODRIGUEZ, Raúl
BERNASCONI, Tulio Marón
BERRI, Ricardo Alejandro
BIANCIOOTTO, Luis Fidel
BIANCHI de ZIZZIAS, Elia A.
BIELICKI, José
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo
BLANCO, Jesús Abel
BLANCO, José Celestino
BONIFASI, Antonio Luis
BONINO, Alberto Cecilio
BORDA, Osvaldo
BOTTA, Felipe Esteban
RUIZ de SANCHEZ, Onofre
BRIZUELA, Delfor Augusto
BRIZUELA, Guillermo Ramón
BRIZUELA, Juan Arnaldo
BULACIO, Julio Segundo
CABELLO, Luis Victorino
CACERES, Luis Alberto
CAFERRI, Oscar Néstor
CAFIERO, Antonio Francisco
CAMISAR, Osvaldo
CANATA, José Domingo
CANGIANO, Augusto

CANTOR, Rubén
CAPUANO, Pedro José
CARRIZO, Raúl Alfonso Corpus
CARRANZA, Florencio
CASTIELLA, Juan Carlos
CASTRO, Juan Bautista
CAVALLARI, Juan José
CAVALLARO, Antonio Gino
CLERICI, Federico
COLLANTES, Genaro Aurelio
CONOLLY, Alfredo Jorge
CONTE, Augusto
CONTRERAS GÓMEZ, Carlos A.
COPELLO, Norberto Luis
CORNAGLIA, Ricardo Jesús
CORTES, Lorenzo Juan
CORZO, Julio César
COSTANTINI, Primo Antonio
CURATOLO, Attilio Arnold
PALMAU, Héctor Horacio
DE LA VEGA de MALVASIO, L. M. D.
DE NICHILLO, Cayetano
DEL RÍO, Eduardo Alfredo
DÍAZ, Manuel Alberto
DÍAZ de AGÜERO, Dolores
DI CIO, Néstor
DIGÓN, Roberto Secundino
DIMASI, Julio Leonardo
DOMÍNGUEZ FERREYRA, Dardo N.
DOUGLAS RINCÓN, Guillermo F.
DOVENA, Miguel Dante
DUSSOL, Ramón Adolfo
ELIZALDE, Juan Francisco C.
ENDEIZA, Eduardo A.
ESPINOZA, Nemecio Carlos
FALCIONI de BRAVO, Ivelise I.
FAPPIANO, Oscar Luján
FERRÉ, Carlos Eduardo
FIGUERA, Ernesto Juan
FINO, Torcuato Enrique
FLORES, Aníbal Eulogio
FURQUE, José Alberto
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCÍA, Carlos Euclides
GARCÍA, Roberto Juan
GARGIULO, Lindolfo Mauricio
GAY, Armando Luis
GERARDUZZI, Mario Alberto
GIACOSA, Luis Rodolfo

GIMÉNEZ, Ramón Francisco
GINZO, Julio José O.
GOLPE MONTIEL, Néstor Lino
GÓMEZ MIRANDA, María F.
GONZALEZ, Héctor Eduardo
GONZALEZ, Joaquín Vicente
GONZALEZ CABANAS, Tomás W.
GOTI, Erasmo Alfredo
GRIMAU, Arturo Aníbal
GUATTLI, Emilio Roberto
GUZMÁN, Horacio
GUZMÁN, María Cristina
HORTA, Jorge Luis
HUARTE, Horacio Hugo
IBÁÑEZ, Diego Sebastián
IGLESIAS, Herminio
IGLESIAS VILLAR, Teófilo
INGARAMO, Emilio Felipe
IRIGOYEN, Roberto Osvaldo
JAROSLAVSKY, César
JUEZ PEREZ, Antonio
LAMBERTO, Oscar Santiago
LAZCOZ, Basualdo Efraín
LEMA MACHADO, Jorge
LIZURUME, José Luis
LOSADA, Mario Aníbal
LUGONES, Horacio Emerico
LLORENS, Roberto
MACAYA, Luis María
MACEDO de GÓMEZ, Blanca A.
MAC KARTHY, César
MAGLIETTI, Alberto Ramón
MANZANO, José Luis
MANZUR, Alejandro
MARTÍNEZ, Luis Alberto
MARTÍNEZ MÁRQUEZ, Miguel J.
MASINI, Héctor Raúl
MASSEI, Oscar Ermelindo
MATZKIN, Jorge Rubén
MAYA, Héctor María
MEDINA, Alberto Fernando
MELÓN, Alberto Santos
MILANO, Raúl Mario
MONSERRAT, Miguel Pedro
MOREAU, Leopoldo Raúl
MOREYRA, Omar Demetrio
MOTHE, Félix Justiniano
MULQUI, Hugo Gustavo

NATALE, Alberto A.
 NIEVA, Próspero
 ORTIZ, Pedro Carlos
 PAPAGNO, Rogelio
 PARENTE, Rodolfo Miguel
 PATINO, Artemio Agustín
 PELAEZ, Anselmo Vicente
 PELLIN, Osvaldo Francisco
 PEPE, Lorenzo Antonio
 PERA OCAMPO, Tomás Carlos
 PEREYRA, Pedro Armando
 PEREZ, René
 PEREZ VIDAL, Alfredo
 PERL, Néstor
 PIERRI, Alberto Reinaldo
 PIUCILI, Hugo Diógenes
 POSSE, Osvaldo Hugo
 PRONE, Alberto Josué
 PUEBLA, Ariel
 PUGLIESE, Juan Carlos
 PUPILLO, Liborio
 PURITA, Domingo
 RAMOS, Daniel Omar
 RAPACINI, Rubén Abel
 RATKOVIC, Milivoj
 RAUBER, Cleto
 REALI, Raúl
 REYNOSO, Adolfo
 RIGATUSO, Tránsito
 RIQUEZ, Félix
 RIUTORT DE FLORES, Olga E.
 RODRIGUEZ, José
 RODRIGUEZ ARTUSI, José Luis
 ROJAS, Ricardo
 ROMANO NORRI, Julio César A.
 RUIZ, Angel Horacio
 SALTO, Roberto Juan
 SAMMARTINO, Roberto Edmundo
 SARQUIS, Guillermo Carlos
 SELLA, Orlando Enrique

SILVA, Carlos Oscar
 SILVA, Roberto Pascual
 SOCCI, Hugo Alberto
 SOLARI BALLESTEROS, Alejandro
 SORIA ARCH, José María
 SPINA, Carlos Guido
 SRUR, Miguel Antonio
 STAYALE, Juan Carlos
 STOLKINER, Jorge
 STORANI, Conrado Hugo
 STORANI, Federico Teobaldo M.
 STUBBIN, Adolfo Luis
 STUBBIN, Marcelo
 SUAREZ, Lionel Armando
 TELLO ROSAS, Guillermo Enrique
 TERRILE, Ricardo Alejandro
 TORRES, Manuel
 TORRESAGASTI, Adolfo
 ULLOA, Roberto Augusto
 USIN, Domingo Segundo
 VAIRETTI, Cristóbal Carlos
 VANOSI, Jorge Reinaldo
 VIDAL, Carlos Alfredo
 YUNES, Jorge Omar
 ZAFFORE, Carlos Alberto
 ZAVALAY, Jorge Hernán
 ZINGALE, Felipe
 ZOCCOLA, Elcio Pablo
 ZUBIRI, Balbino Pedro

AUSENTES, EN MISION OFICIAL:
 RODRIGUEZ, Jesús
 TRIACA, Alberto Jorge

AUSENTES, CON LICENCIA:
 ABDALA, Luis Oscar¹
 ALBERTI, Lucía Teresa N.¹
 BARRENO, Rómulo Víctor¹
 CARIGNANO, Raúl Eduardo¹
 CASTILLO, Miguel Angel¹

DAUD, Ricardo¹
 DE LA SOTA, José Manuel¹
 DRUETTA, Raúl Augusto¹
 GIMENEZ, Jacinto¹
 GOROSTEGUI, José Ignacio¹
 GUELAR, Diego Ramiro¹
 LENCINA, Luis Ascensión¹
 LESCANO, David¹
 LESTELLE, Eugenio Alberto¹
 LÓPEZ, Santiago Marcelino¹
 NEGRI, Arturo Jesús¹
 PEDRINI, Adam¹
 RODRIGO, Juan¹
 RUBEO, Luis¹
 SANCHEZ TORANZO, Nicasio¹
 VANOLI, Enrique Néstor¹

AUSENTES, CON AVISO:

ALBORNOZ, Antonio
 ALTAMIRANO, Amado Héctor H.
 BIANCHI, Carlos Humberto
 BORDÓN GONZÁLEZ, José Octavio
 CARDOZO, Ignacio Luis Rubén
 COLOMBO, Ricardo Miguel
 GONZÁLEZ, Alberto Ignacio
 GROSSO, Carlos Alfredo
 LEPORI, Pedro Antonio
 MASSACcesi, Horacio
 MIRANDA, Julio Antonio
 RABANAQUE, Raúl Octavio
 REZEK, Rodolfo Antonio
 SABADINI, José Luis
 SERRALTA, Miguel Jorge
 TOMA, Miguel Angel
 TORRES, Carlos Martín
 VACA, Eduardo Pedro

¹ Solicitud pendiente de aprobación de la Honorable Cámara.

SUMARIO

1. Continúa la consideración del dictamen de la Comisión de Legislación Penal en los proyectos de ley de los señores diputados Cortese (1.130-D-86) y De la Sota y otros (3.583-D-85) sobre modificaciones al Código Penal (ley 11.179). Vuelve a la Comisión de Legislación Penal y se gira asimismo a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Página 6205.)
2. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor diputado Manzano y otros por el que se modifica el artículo 1º de la ley 23.349, sustitutiva de la ley de impuesto al valor agregado (texto ordenado en 1977 y sus modificaciones) (1.568-D-86). Se sanciona. (Pág. 6214.)
3. Consideración del dictamen de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Legislación General en los proyectos de ley del Poder Ejecutivo (30-P.E.-85) y de los señores diputados Baglini y Mosso (1.478-D-86) sobre honorarios de los abogados y procuradores dependientes de las cajas nacionales de previsión y de la Dirección Nacional de Recaudación Previsional. Se sanciona. (Pág. 6215.)
4. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley de los

- señores diputados Rodríguez (Jesús) y otros (1.562-D-86) y Manzano y otros (1.569-D-86) sobre incremento por el término de dos años de las tasas de la ley de impuestos internos establecidas en los artículos que se detallan. Se sanciona. (Pág. 6219.)
5. Consideración del dictamen de la Comisión de Previsión y Seguridad Social en el proyecto de ley de la señora diputada Guzmán sobre modificación de la ley 18.017 (texto ordenado en 1974) a efectos de incorporar la asignación familiar por escolaridad del cónyuge (1.545-D-85). Se sanciona. (Pág. 6222.)
 6. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio entre la República Argentina y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, suscrito en la ciudad de Buenos Aires el 21 de noviembre de 1984 (96-S.-86). Se sanciona definitivamente (ley 23.422). (Pág. 6223.)
 7. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley en revisión por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a donar al Museo Histórico de La Habana, República de Cuba, una reproducción fiel del sable corvo del general don José de San Martín (104-S.-86). Se sanciona definitivamente (ley 23.423). (Pág. 6226.)

8. Consideración del dictamen de las comisiones de Familia, Mujer y Minoridad, de Previsión y Seguridad Social, de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley en revisión (94-S.-84) y del señor diputado Piucilli y otros (2.478-D.-85) sobre otorgamiento de beneficios a derechohabientes de personas desaparecidas entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983. Se sanciona. (Pág. 6226.)
9. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Comercio, de Educación y de Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueban el Acuerdo de Creación de la Comisión Mixta de Cooperación Económica, Comercial, Científico-Tecnológica y Cultural, y el Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la República Argentina y la República Argentina Democrática y Popular, suscritos en Argel el 3 de diciembre de 1984 (50-S.-86). Se sanciona definitivamente (ley 23.424). (Página 6230.)
10. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Energía y Combustibles y de Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la Enmienda al artículo VI del Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica, aprobada por la Conferencia General del mencionado organismo el 27 de septiembre de 1984 (54-S.-86). Se sanciona definitivamente (ley 23.425). (Pág. 6234.)
11. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de los señores diputados Vanoli y Baglini por el que se faculta al Instituto Nacional de Cinematografía a emplear disponibilidades financieras en la adquisición de títulos de la deuda pública u otras emisiones de valores públicos y en colocaciones en el Banco de la Nación Argentina (1.191-D.-86). Se sanciona. (Pág. 6236.)
12. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Defensa Nacional en el proyecto de ley de los señores diputados Pepe y Rodríguez (Jesús) por el que se modifica el artículo 20 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, a efectos de exceptuar de los alcances de dicha ley al denominado suplemento antártico que percibe el personal civil y militar (1.061-D.-86). Se sanciona. (Pág. 6237.)
13. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Transportes en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo sobre Servicios de Transporte Aéreo entre los Gobiernos de la República Argentina y de los Estados Unidos de América, y sus dos anexos, suscrito en la ciudad de Buenos Aires el 22 de octubre de 1985 (31-S.-86). Se sanciona definitivamente (ley 23.426). (Pág. 6237.)
14. Consideración del dictamen de las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de los señores diputados Gómez Mi-

randa y Cornaglia sobre creación de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social en el ámbito del Poder Judicial de la Nación (499-D.-86). Se sanciona con modificaciones. (Pág. 6243.)
15. Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación Penal en los proyectos de ley de los señores diputados Canicoba (2.183-D.-85), Fino (3.596, 3.778, 3.849 y 3.876-D.-85) y Vanossi (10-D.-86) sobre modificaciones al Código de Procedimientos en materia penal. Se sanciona. (Pág. 6252.)
16. Moción de orden del señor diputado Bisciotti de que se aplaze el tratamiento de los asuntos incluidos en el plan de labor a efectos de considerar de inmediato el dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento en los proyectos de resolución de los señores diputados Rigatuso y Allegrone de Fonte (2.128-D.-86) y reproducido por la señora diputada Allegrone de Fonte (2.140-D.-86) sobre modificación del artículo 25 del reglamento de la Honorable Cámara. Se aprueba. (Pág. 6259.)
17. Consideración del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento al que se refiere el número 16 de este sumario. Se sanciona. (Pág. 6260.)
18. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas en las enmiendas introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre creación y régimen legal del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa (2.598-D.-85). Se sanciona definitivamente (ley 23.427). (Pág. 6261.)
19. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor diputado Rodríguez (Jesús) y otros (1.561-D.-86) sobre modificación del artículo 1º de la ley 23.349, sustitutiva de la ley de impuesto al valor agregado (texto ordenado en 1977 y sus modificaciones). Se sanciona. (Pág. 6278.)
20. Consideración de los dictámenes de mayoría y minoría de las comisiones de Educación, de Transportes, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre ley nacional de teatro (41-S.-85). (Pág. 6279.)
21. Solicitud del señor diputado Terrile y otros señores diputados de que se difiera la realización de la sesión especial convocada para considerar los dictámenes de la Comisión de Legislación del Trabajo en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre regulación de los convenios colectivos de trabajo. Se aprueba. (Pág. 6308.)
22. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 20 de este sumario. Se sanciona con modificaciones. (Pág. 6308.)
23. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio de Cooperación entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República de Nica-

internos y cargas similares que no se basen en el costo de los servicios prestados, para los equipos regulares y de rampa, combustibles y lubricantes, elementos técnicos consumibles, repuestos y provisiones de aeronaves, siempre que éstos permanezcan en el avión.

Se reconocen los certificados de aeronavegabilidad, de competencia y las licencias otorgadas por sus respectivas autoridades, como también el derecho de establecimiento de las representaciones aéreas en forma recíproca.

Se comprometen a eliminar la competencia desleal o discriminatoria con efectos contrarios hacia las empresas aéreas de la otra parte y al no establecimiento de límites en el volumen del tráfico, frecuencias o regularidad de los servicios. A todos los efectos ambas partes prevén el régimen de consultas.

Los anexos, relativos a planes de rutas y modalidades de vuelos estarán en vigencia hasta el 30 de abril de 1988, en tanto el Acuerdo tendrá una duración indefinida, posibilitándose su denuncia.

En virtud de que la sanción del proyecto en revisión que aprueba el Acuerdo en análisis redundará en un beneficio directo y recíproco de las dos comunidades, es que las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Transportes solicitan el apoyo de la Honorable Cámara a la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional.

Federico T. M. Storani.

OBSERVACION

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1986.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Juan Carlos Pugliese.

S/D.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para efectuar algunas observaciones sobre el Orden del Día Nº 390 del 26 de agosto de 1986, al dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Transportes, referido al acuerdo sobre servicios de transporte aéreo entre los gobiernos de la República Argentina y de los Estados Unidos de América, suscrito en la ciudad de Buenos Aires el 22 de octubre de 1985.

El convenio presentado por el Poder Ejecutivo para su ratificación al Congreso de la Nación contiene aspectos delicados para el transporte aéreo de nuestro país.

Desde 1948 no se pudo concretar ningún convenio que atendiera el interés argentino, a pesar de que hubo varias negociaciones. Esto se debió fundamentalmente a la imposibilidad de aceptar la política de total libertad del tráfico aerocomercial que los Estados Unidos de América propician como doctrina internacional en el tema.

En el presente convenio Argentina acepta esta política, como está expresado en el mensaje del Poder Ejecutivo en su envío al Parlamento cuando dice: "así como a no establecer límites sobre el volumen de tráfico, la frecuencia o la regularidad del servicio". El artículo VIII, sobre "competencia leal", lo estipula más concretamente en sus 5 puntos.

Los 2 anexos que componen el convenio y que estipulan algunas limitaciones estarán vigentes hasta el 30

de abril de 1988, después de esta fecha no se aclara si deben acordarse otros anexos.

El convenio ignora totalmente el tema tarifario, lo que, conocida la actitud de los Estados Unidos de América en este ítem, resulta peligroso para una real competencia leal.

El convenio, al permitir a partir de 1988 un régimen de libertad total, descolocaría a las empresas argentinas, que no podrían resistir esta competencia. En sus artículos IX y X, sobre consultas y terminación, se da una elasticidad tan grande a la forma y vigencia de este acuerdo que hace pensar en la "provisoriedad" de éste. Todo dependerá de que los EE.UU. no se permita una excesiva libertad en este tema, aunque el convenio se lo permita.

También es criticable el punto 6 del artículo VI sobre oportunidades comerciales, donde se dice que "cada línea aérea de una de las partes tendrá derecho a convertir y remesar a su país, si lo pudiera, los ingresos locales que excedan de las sumas desembolsadas localmente. La conversión y la remesa de dinero será autorizada prontamente y sin impedimentos o impuestos al respecto...", o sea sin atenerse a la política que sobre el tema estuviera vigente.

Por estos motivos quiero dejar expresa reserva de mis objeciones con respecto a la ratificación de este convenio.

Saludo a usted con mi más alta consideración.

José O. Bordón González.

Sr. Presidente (Silva). — En consideración el artículo único del proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Resulta afirmativa.

—El artículo 2º es de forma.

Sr. Presidente (Silva). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley¹.

Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.

14

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Orden del Día Nº 477)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley de los diputados Gómez Miranda y Cornaglia sobre creación en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social; y, por las razones expuestas en el informe que se acom-

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 6397.)

pañía y las que dará el miembro informante, aconsejan su sanción.

Sala de las comisiones, 4 de septiembre de 1986.

Ricardo M. Colombo. — Jesús Rodríguez. — Próspero Nieva. — Ariel Puebla. — Alejandro Solari Ballesteros. — Antonio Albornoz. — Ramón R. Arrechea. — Alberto C. Bonino. — Pedro J. Capuano. — Juan C. Castiella. — Juan B. Castro. — Ricardo J. Cornaglia. — Lorenzo J. Cortese. — Eduardo A. Del Río. — Oscar L. Fappiano. — José A. Furque. — Nicolás A. Garay. — Mario A. Gerarduzzi. — María F. Gómez Miranda. — Roberto O. Irigoyen. — Antonio Juez Pérez. — Jorge R. Matzkin. — Raúl M. Milano. — Miguel P. Monserrat. — Hugo G. Mulqui. — René Pérez. — Julio C. A. Romano Norri. — Hugo A. Sochi. — Carlos G. Spina. — Lionel A. Suárez. — Carlos A. Vidal. — Carlos A. Zaffore. — Balbino P. Zubiri.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CREACION DE LA CAMARA DE APELACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 1º — Créase la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, que integrará el Poder Judicial de la Nación; tendrá su sede en la Capital Federal, actuará dividida en tres salas de tres jueces cada una y a la que le serán aplicables las disposiciones del decreto ley 1.285/58.

Art. 2º — La Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social tendrá un secretario general y un secretario para cada sala. El personal administrativo, técnico y de servicio será nombrado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 3º — Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 31 del decreto ley 1.285/58 por el siguiente:

Las cámaras nacionales de apelaciones en lo Civil; en lo Comercial; en lo Criminal y Correccional; del Trabajo; y de la Seguridad Social y en lo especial Civil y Comercial y en lo Penal Económico de la Capital Federal, se integrarán por sorteo, entre los demás miembros de ellas; luego del mismo modo con los jueces de las otras Cámaras nacionales de apelaciones en el orden establecido por esta ley, salvo el caso de la de Trabajo, que se integrará en primer término con los de la Cámara de la Seguridad Social y viceversa; y, por último, siempre por sorteo, con los jueces de primera instancia que dependan de la Cámara que debe integrarse.

Art. 4º — Inclúyese como inciso i) del punto 1 del artículo 32 del decreto ley 1.285/58, al siguiente:

i) De la seguridad social.

Art. 5º — Créanse dos fiscalías de cámara cuyos titulares ejercerán el ministerio público, reemplazándose mutuamente en caso de licencia, excusación, impedimento o vacante. Vacantes ambos cargos o impedidos los funcionarios actuarán como fiscales de cámara el procurador general o el subprocurador general del trabajo.

Art. 6º — Corresponde a los fiscales de cámara:

- a) Intervenir en todos los asuntos que interesen a la persona y bienes de menores, incapaces y ausentes entablado en su defensa acciones y recursos;
- b) Ser parte en materia de competencia;
- c) Evacuar las vistas conferidas por la cámara;
- d) Intervenir en los asuntos relativos a la superintendencia de la cámara;
- e) Dictaminar en los asuntos sometidos a plenario;
- f) Velar por la uniformidad de la jurisprudencia;
- g) Solicitar la revisión de jurisprudencia plenaria;
- h) Participar de los acuerdos de la cámara con voz pero sin voto.

El ministerio público podrá declinar su intervención en las vistas que versen sobre cuestiones de hecho y pruebas de cuya valoración dependa la solución del litigio, o sobre cuestiones procesales en las que no se contraviertan la validez o regularidad de los procedimientos.

Art. 7º — La cámara distribuirá las tareas que han de desempeñar ambos funcionarios y anualmente determinará cuál de los fiscales intervendrá en los asuntos de superintendencia, asistirá a los acuerdos y dictaminará en las causas sometidas a plenario.

Art. 8º — Inclúyese como artículo 39 bis del decreto ley 1.285/58 el siguiente:

La Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social conocerá:

- a) En los recursos de apelación interpuestos contra resoluciones o actos administrativos dictados por las cajas nacionales de previsión o por las cajas complementarias instituidas por ley que afecten derechos de los afiliados, beneficiarios, peticionarios de prestaciones o de afiliación, empleadores y, en general, de cualquier persona que fuera afectada en su interés legítimo;
- b) En los recursos de apelación interpuestos contra resoluciones de la Comisión Nacional de Previsión Social, que denieguen total o parcialmente impugnaciones de deudas establecidas por la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, conforme el artículo 15 de la ley 18.820;
- c) En los recursos de apelación interpuestos contra resoluciones de las cajas nacionales de subsidios familiares creadas por los artículos: 5º del decreto-ley 7.913/57; 8º del decreto-ley 7.914/57 y 1º del decreto-ley 3.256/65, ratificado por ley 16.887;

- d) En los recursos de apelación interpuestos contra resoluciones del Instituto Municipal de Previsión Social, dictadas conforme al inciso a) del artículo 15 de la ordenanza municipal 33.667;
- e) En los recursos de apelación interpuestos contra resoluciones de la Comisión Nacional de Previsión Social;
- f) En los recursos de queja por apelación denegada y en los pedidos de pronto despacho de conformidad con el artículo 28 de la ley 19.549.

La competencia atribuida por la presente a la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social no excluye la de los respectivos tribunales competentes, para conocer en procesos ordinarios o especiales contra los organismos nacionales de previsión social, las cajas de subsidios familiares o el Instituto Municipal de Previsión Social.

Art. 9º — Los recursos enumerados en el artículo anterior deberán presentarse con firma de letrado y con expresión de agravios ante el mismo organismo que dictó la medida y dentro de los treinta días de notificada si el interesado se domiciliare en la Capital Federal, de noventa días si se domiciliare en el interior del país o en el extranjero.

Si el interesado se domiciliare en el interior del país, podrá optar por presentar el recurso ante el juez federal de su domicilio, quien remitirá las actuaciones a la cámara.

Art. 10. — El organismo cuya decisión hubiese sido recurrida enviará las actuaciones administrativas dentro de los 10 días de interpuesto el recurso, o dentro de los cinco días de serle requerido por el tribunal en el supuesto que la interposición se hubiere hecho ante el juez federal.

Art. 11. — Interpuesto el recurso de apelación y previa vista al ministerio público si la estimare necesaria, la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, resolverá de acuerdo a las constancias del expediente, sin perjuicio de las medidas que de oficio para mejor proveer dispusiere.

La sentencia de la cámara contendrá la decisión sobre lo que ha sido materia de recurso; dispondrá sobre las costas; regulará los honorarios de los profesionales intervinientes; y si prosperare la apelación, fijará un plazo para el cumplimiento de la sentencia, con sanciones pecuniarias, compulsivas y progresivas a cargo de los respectivos organismos, para el supuesto de incumplimiento del fallo dentro del plazo fijado.

Al resolver en los recursos de queja y pedidos de pronto despacho, según las circunstancias del caso, podrá disponer las costas a cargo de los organismos responsables de la mora administrativa.

Art. 12. — Los jueces que se designen para integrar la cámara que se crea por esta ley no prestarán juramento, ni el personal de esa cámara entrará en funciones, hasta tanto los despachos y demás locales estén instalados y en condiciones de permitir el funcionamiento del tribunal.

Art. 13. — El cambio de competencia establecido por el artículo 8º no afectará las causas en trámite. La cámara conocerá también en aquellos recursos interpuestos con anterioridad a la vigencia de la ley en que las actuaciones no hubiesen sido elevadas aún al tribunal entonces competente.

Art. 14. — Las causas que se tramiten ante la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social se regirán por la presente ley y supletoriamente por las disposiciones de la ley 18.345 y del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 15. — Deróganse los artículos 13 y 14 de la ley 14.236; el artículo 8º de la ley 15.223; el artículo 55 del decreto ley 3.256/65, ratificado por ley 16.887; el artículo 1º de la ley 18.499; los párrafos 1º y 3º del artículo 15 de la ley 18.820; el artículo 28 de la ley 19.346; la segunda parte del artículo 22 de la ley 21.205; las leyes 18.477 y 19.038 y primero y segundo párrafo del artículo 23 de la ley de facto 22.804.

Art. 16. — Los gastos que demande la aplicación de la presente ley serán imputados a "Rentas generales".

Art. 17. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

María F. Gómez Miranda. — Ricardo J. Cornaglia.

INFORME

Honorable Cámara:

El proyecto de ley puesto a consideración de esta honorable Cámara propiciando la creación de una Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, es a nuestro entender un acierto, pues viene a llenar un vacío legislativo existente con relación a la autonomía y relevancia que ha adquirido el derecho previsional y de la seguridad social.

La doctrina moderna se ha ocupado en forma cada vez más concienzuda de esta rama del derecho cuya función tuitiva debe ejercerse en forma rápida y eficaz buscando evitar dilaciones estériles para la solución de los cada vez más numerosos problemas que se presentan dentro del área de la seguridad social, a través de una mayor especialización jurisdiccional que se corresponda con la especificidad de las normas jurídicas de esta rama.

Estos cometidos serán cumplidos a través de la creación de la cámara que hoy se pone a vuestra consideración, la que será integrada por jueces con versación específica en la materia y dotará a los recurrentes de un fuero especializado en cuestiones de seguridad social.

Es de destacar que desde hace varios años la cámara laboral se ha visto frente a la abrumadora tarea de resolver un inmenso número de causas que llegan a su conocimiento razón por la cual ha debido solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en forma general, la ampliación de los términos para dictar sentencia. Este exceso de tareas no se solucionarían en la alzada creando nuevas salas, tal como fuera propuesto en diversos proyectos, ya que este remedio ocasionaría, tal como lo manifestara la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su acordada Nº 37 del año 1984

"...trastornos funcionales, en especial en tramitación de los fallos plenarios..."

La creación de esta nueva cámara, a la cual se le atribuye competencia para atender en los recursos contra las decisiones de los organismos del sistema nacional y municipal de la seguridad social, hasta hoy resueltos por la cámara laboral, será un paso efectivo e impostergable para que los tribunales del trabajo, viendo así disminuida su labor, puedan atender eficazmente las contiendas laborales y quienes acuden a la justicia para resolver conflictos relacionados con el derecho previsional y de la seguridad social consigan una más rápida y mejor solución de los mismos.

Ricardo J. Cornaglia.

OBSERVACION

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1986.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan Carlos Pugliese.

S/D.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de formular observación al dictamen de las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda contenido en el Orden del Día N° 477, relacionado con la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, que integrará el Poder Judicial de la Nación. Creación; cuyos fundamentos oportunamente formularé.

Sin otro particular saluda a usted muy atentamente.

Jorge R. Vanossi.

Sr. Presidente (Silva). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Vanossi. — Señor presidente: las observaciones al Orden del Día N° 477 las formuló quien habla. Simplemente tienen por objeto solicitar una incorporación al artículo 11 del dictamen, que significa un adelanto sustancial en materia de protección jurisdiccional; pero para que pueda ser mayor su alcance protector es menester que entre las facultades que la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social tendrá, quede incluida no sólo la revisión e interpretación del derecho sino también la revisión y control sobre los hechos.

Al quedar excluidos los hechos del tradicional procedimiento en materia previsional, muchos posibles beneficiarios sufrirían un perjuicio irreparable al carecer de instancias amplias y abiertas para poder hacer valer su derecho conforme a los hechos. En tal sentido quedarían trabados de manera tal que se impediría el reconocimiento del consiguiente derecho previsional.

No he de abundar en los detalles que fundamentan mi observación, pues habré de acompañarlos por escrito y desde ya solicito su inserción en el Diario de Sesiones, pero sí me habré de permitir leer las dos incorporaciones que a mi juicio hay que efectuar en el artículo 11 del proyecto contenido en el dictamen. Antes de ello deseo preguntar a la Presidencia si no resultaría procedente que en primer término se votara en general el asunto a fin de que luego, en la instancia del tratamiento en particular, pueda exponer el texto concreto de mis propuestas.

Sr. Presidente (Silva). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cornaglia. — Señor presidente: esta iniciativa nos llega a mérito de la inquietud de la señora diputada María Florentina Gómez Miranda. El proyecto mereció una larga consideración por parte de la Comisión de Justicia y el año pasado estuvo a punto de ser considerado por el plenario, aunque el final del período ordinario de sesiones provocó la imposibilidad de su tratamiento en aquel entonces.

Se trata de una iniciativa de profunda trascendencia social y se refiere a una categoría de intereses largamente postergados: la de los hombres que acuden al sistema de seguridad social cuando las razones de vejez, enfermedad o incapacidad los obligan a confiar en el Estado y requerir los mínimos garantidos, a veces hasta para poder subsistir.

Esta circunstancia conduce a la necesidad de la creación de un fuero especial que decida acerca de cuestiones que previamente se discuten en las cajas de jubilaciones y posteriormente en la Comisión Nacional de Seguridad Social.

Todas estas cuestiones terminan por ingresar a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que desde 1944, por un decreto de organización de la justicia, es la competente para entender en estos temas. Lo cierto es que en la realidad social argentina el cúmulo de causas, la falta de especialización de la magistratura y la precariedad de medios impiden que quienes acuden ante la Justicia cuenten con todos los elementos de acceso a ella que un Estado de derecho participativo y democrático debe dar, determinando que la decisión de estos reclamos de justicia tarde mucho tiempo, a veces períodos que abarcan varios años, produciéndose el efecto no querido de que la justicia del trabajo, por lenta, se transforme en injusticia.

Muchas veces la satisfacción del derecho de quienes están sometidos a esta clase de inconvenientes derivados de la tardanza y de la mecánica burocrática se torna ilusoria, y la finali-

dad de la seguridad social no se cumple. De esa manera, el estado de derecho democrático queda en deuda con vastos sectores de la población que no acceden a la real y verdadera justicia.

Estas circunstancias han sido denunciadas por especialistas y numerosas organizaciones gremiales sensibles a la situación de los trabajadores que entran en estado de pasividad, así como también por las organizaciones de aquellos que militan en la categoría de intereses propios de la tercera edad, entre los que se encuentran los jubilados y pensionados. Estos planteos que atacan por insensibilidad social a nuestra estructura de justicia han llegado a sacudir las fibras más íntimas no sólo de los partidos populares, sino también las de la estructura de los poderes.

Tanto es así que la actual Corte Suprema de Justicia, reconociendo la gravedad de la situación, en una de sus primeras acordadas, dictada en 1984, aconsejó la creación de un fuero especial de previsión social integrado únicamente por una cámara de apelaciones con competencia en los recursos que se planteen contra las declsiones de los organismos del sistema nacional o municipal de seguridad social. Dice esta acordada del año 1984: "Se espera que aun cuando la materia laboral y la previsional son afines y pueden perfectamente ser atribuidas a un mismo fuero, como ocurre en la realidad, el número de causas requeriría en ese caso la creación de nuevas salas en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; pero dicha solución sería inconveniente porque al contar ya con ocho salas, la elevación del número de éstas produciría trastornos funcionales en especial en la tramitación de los fallos plenarios".

Esta fue la posición que adoptó el más alto tribunal del país en función de responder con sentido de sensibilidad social a este problema que termina por desjerarquizar la función concreta vinculada a la necesidad de hacer justicia para esta clase de pretensiones de jubilados y pensionados, quienes recurren en defensa de sus derechos subjetivos a la actual organización de la justicia, cuando esos derechos no son reconocidos por el sistema de seguridad social.

Este es el paso importante que queremos dar. Reconociendo esa situación, proponemos crear la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, iniciativa que lleva además del valor indudable de las inquietudes sociales de la señora diputada Gómez Miranda, el aporte del doctor Amadeo Allocatti, que ha sido un impulsor efectivo de este proyecto, forjador del derecho del trabajo y una figura representativa en materia de procedimiento laboral.

Tenemos que reconocer que el proyecto en consideración brinda realmente a la sociedad argentina un instrumento moderno y eficaz.

El cúmulo de causas que existe en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo justifica esta iniciativa. Las estadísticas señalan que entre el 3 de febrero de 1986 y el 5 de agosto del mismo año la Cámara recibió 27.600 expedientes, de los que 19.600 correspondieron a materia previsional y los 8 mil restantes a cuestiones ordinarias. De la totalidad de expedientes mencionados, al 30 de junio de 1986 se habían resuelto 7.400 ordinarios y 6 mil previsionales. Esta gran cantidad de causas provoca que la administración de justicia sea lenta, precaria y no especializada.

Con esta iniciativa estamos dando un paso importante para lograr el desarrollo de un fuero especial, alcanzar una unificación de criterios jurisprudenciales y asegurar la celeridad en la administración de justicia. También se beneficia la justicia laboral, que dispondrá de una Cámara Nacional de Apelaciones que no estará recargada con los asuntos que atañen a las cuestiones de la seguridad social. Además, entre otras cosas, se podrá cumplir con los términos previstos para dictar sentencia, que no siempre son respetados en el fuero del trabajo, con perjuicio en particular de los intereses de los trabajadores y de sus familias, que se ven postergados con motivo del retardo en la acción de la Justicia.

Este proyecto constituye una forma rápida de permitir el tratamiento inmediato, profundo y eficaz que requieren los asuntos laborales. También se otorga una mayor protección a los derechos subjetivos de la clase pasiva, y esto es importante dada la necesidad de respuestas objetivas que reclama el sector de los jubilados.

En este momento hay que replantear todo lo atiente al sistema de seguridad social, pero también debe considerarse lo que se vincula con la eficacia de la Justicia, que debe brindar respuestas a las necesidades y a las tremendas carencias que se están padeciendo. Esta iniciativa significa un desprendimiento del fuero laboral, pero no se trata de un desgarramiento. Por el contrario, constituye un paso que permite un avance en los mecanismos de un estado social de derecho, que tiene como objetivo la protección de intereses sagrados para los hombres. Todo esto es consecuencia del reconocimiento de la soberanía popular en defensa de los intereses del pueblo y, fundamentalmente, de sus sectores más desprotegidos.

Este proyecto es de suma importancia. Debe ser aprobado por el Congreso de la Nación para dar una respuesta efectiva y cierta a las necesidades urgentes de la clase pasiva. En la discusión en particular me referiré a las modificaciones que deberán introducirse y escucharé con atención las observaciones que formulen los señores diputados en torno a este tema. (*Aplausos*.)

Sr. Presidente (Silva). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Cortese. — Señor presidente: como miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda he suscrito el dictamen en consideración. Los argumentos expuestos por el señor diputado Cornaglia resultan suficientes para señalar la importancia y la significación de lograr una justicia ágil, especializada y profesional en este ámbito.

Respecto a lo que podría constituir una legislación futura sobre este tema, solicito a la Comisión de Justicia que considere la posibilidad de que las actuaciones judiciales en materia previsional puedan descentralizarse, a fin de que un jubilado de cualquier provincia litigue en el ámbito de su propio territorio provincial contra el Estado cuando se le niegue su beneficio previsional, más allá de que en el ámbito administrativo — como todos sabemos — deba tramitar las últimas instancias ante los organismos que tienen su sede en la Capital Federal.

Sr. Presidente (Silva). — Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Fappiano. — Sin perjuicio de dar nuestro voto afirmativo en general a este proyecto, y haciéndome cargo de la preocupación manifestada por el señor diputado Cortese, hago presente que esa situación se encuentra parcialmente contemplada — aunque es una forma de solución y un camino que se abre — en el artículo 9º *in fine* de este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Silva). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cornaglia. — Señor presidente: evidentemente, la inquietud del señor diputado Cortese no sólo se vincula con la obtención de una mayor celeridad sino también con que haya intermediación en el reclamo de la clase pasiva, lo que se logra a través de la justicia ordinaria de la provincia en el fuero laboral, fundamentalmente. Esto implica una revalorización de la cuestión, ya que probablemente más adelante habrá que volver a discutir cuáles son los ámbitos y

competencias específicos de los tribunales laborales en cada provincia y la forma en que deben asumir esta clase de intereses.

En materia de seguridad social hay distintas categorías de conflictos que pueden merecer diferentes consideraciones. Lo cierto es que está muy bien el planteo del señor diputado Cortese tendiente a conseguir descentralización efectiva e intermediación, además de celeridad. Este es el paso que debemos dar ahora, y sin ninguna duda tenemos que dejar reservas para avanzar luego sobre él. Quizá los argentinos ya tendríamos que haber dado hace muchos años este paso, que es lo que estamos haciendo ahora y que nos permite enorgullecernos del funcionamiento del Parlamento en la materia.

Sr. Presidente (Silva). — Se va a llamar para votar.

—Se llama para votar. Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Silva). — En este momento hay número en el recinto.

Se va a votar en general.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Silva). — En consideración en particular el artículo 1º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 2º a 7º.

Sr. Presidente (Silva). — En consideración el artículo 8º.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Juez Pérez. — Señor presidente: si bien he suscrito el dictamen como integrante de la Comisión de Justicia, considero conveniente hacer una aclaración a fin de dilucidar una aparente contradicción que surgiría en el último párrafo del artículo en consideración, en donde dice: "La competencia atribuida por la presente a la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social no excluye la de los respectivos tribunales competentes, para conocer en procesos ordinarios o especiales contra los organismos nacionales de previsión social, las cajas de subsidios familiares o el Instituto Municipal de Previsión Social".

Teniendo en cuenta esta redacción podría entenderse que se trata de competencias superpuestas. Por eso considero conveniente dejar

aclarado que se está haciendo referencia a otros recursos que nada tienen que ver con los que se puntualizan en los distintos incisos del artículo.

Sr. Presidente (Silva). — ¿El señor diputado propone una nueva redacción o formula una aclaración?

Sr. Juez Pérez. — Señor presidente: formulo una aclaración que podrá servir como elemento interpretativo del presente artículo.

Sr. Presidente (Silva). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Gómez Miranda. — No hay confusión alguna si tenemos presente que el artículo en consideración se refiere a los recursos de apelación interpuestos contra resoluciones administrativas. Por ello, los juicios por denegatoria de justicia, por retardo de justicia o por indemnización no competarán a la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social sino a la Justicia Nacional del Trabajo. En consecuencia —reitero—, no habrá confusión en quien interprete esta ley, porque sabrá perfectamente que los recursos a que ella se refiere son los interpuestos contra resoluciones administrativas.

Deseo proponer un agregado al inciso e) del artículo 8º del proyecto de ley...

Sr. Presidente (Silva). — La Presidencia entiende que debe ceder el uso de la palabra al señor diputado Fappiano, quien se referirá al tema en discusión.

Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Fappiano. — Señor presidente: creo que es correcto el párrafo final porque en esta materia contencioso-administrativa la pretensión procesal administrativa tiene dos formas de manifestación. Una de ellas está constituida por estos recursos de apelación que estatuyen las diferentes leyes previsionales, los que en verdad deberían denominarse recursos directos, porque en razón de la división de poderes los actos administrativos no pueden apelarse en el Poder Judicial. La otra forma de manifestación está dada por la demanda contencioso-administrativa o el proceso de plena jurisdicción —tal como se denomina en la terminología tribalunalia de la provincia de Buenos Aires—, razón por la cual esta cámara ve limitada su competencia a los recursos de apelación. Pero no ocurre lo mismo con las demandas plenas en relación con las cuales se establece una técnica que es adecuada a la doctrina en el sentido de la doble manifestación de la pretensión procesal administrativa.

Por otra parte, propongo que en el inciso i) del artículo 8º se sustituya la expresión "pedidos de pronto despacho" por el término "pedidos de amparos", ya que ésta es la denominación utilizada en el artículo 28 de la ley 19.549.

Sr. Presidente (Silva). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Juez Pérez. — Señor presidente: esta cámara tiene facultades legales para conocer en esos recursos, pero resulta que ahora se le retiran esas facultades para ser otorgadas a una nueva sala.

Sra. Gómez Miranda. — ¡No, señor diputado!

Sr. Presidente (Silva). — La Presidencia ruega no interrumpir al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Juez Pérez. — Por lo tanto, quiero significar que se crea una nueva sala con facultades y competencia en esos recursos y no puede decirse lisa y llanamente que ello sea así sin perjuicio de las competencias de la cámara. En consecuencia, habría que aclarar que se otorgan esas facultades a la nueva sala, sin perjuicio de la competencia de la cámara en otras acciones contra estos organismos.

Sr. Presidente (Silva). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cornaglia. — Señor presidente: sugiero amablemente al señor diputado Juez Pérez que recuerde el debate mantenido en la Comisión de Justicia y que tenga en cuenta que el artículo 1º de este proyecto de ley dice: "Créase la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social..." Sin embargo, el señor diputado sigue insistiendo en el concepto de sala, cuando en realidad hemos adoptado el criterio de hablar de cámara. Reconozco que en algún momento se planteó una discusión doctrinaria en relación con este tema, pero debo advertir que hemos seguido un camino distinto. Es decir que el señor diputado se refiere a una sala cuando en realidad estamos creando una cámara. Por lo tanto, entiendo que no son válidas las observaciones formuladas por el señor diputado Juez Pérez.

Sr. Presidente (Silva). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Gómez Miranda. — Señor presidente: tal como lo adelanté, vamos a proponer algunas modificaciones al texto original. En el inciso b) del artículo 8º dice: "...conforme el artículo 15..." y debe decir: "...conforme el artículo 14..." en el inciso d) del mismo artículo, don-

de dice: "... artículo 15...", debe decir: "... artículo 5º..."; y en el inciso e) del mismo artículo la redacción definitiva sería la siguiente: "En los recursos de apelación interpuestos contra resoluciones de la Comisión Nacional de Previsión Social, al resolver conflictos suscitados con motivo de la aplicación del régimen de reciprocidad instituido por el decreto ley 9.316/46".

Sr. Presidente (Silva). — Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Fappiano. — Señor presidente: a fin de evitar reiteraciones en este agregado sugerido por la señora diputada Gómez Miranda, propongo que en lugar de decir: "... contra resoluciones de la Comisión Nacional de Previsión Social, al resolver...", se utilice el verbo "decidir". Asimismo solicito a la comisión que en el inciso f) tenga en cuenta la observación que he formulado.

Sr. Presidente (Silva). — Tiene la palabra la señora diputada por Capital.

Sra. Gómez Miranda. — Aceptamos cambiar el término "resolver" por "decidir".

Sr. Presidente (Silva). — Se va a llamar para votar.

—Se llama para votar. Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Silva). — Habiendo número en el recinto, se va a votar el artículo 8º con las modificaciones propuestas por la señora diputada Gómez Miranda en nombre de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Silva). — En consideración el artículo 9º.

Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. García (C. E.). — Señor presidente: creo que el artículo 9º omite el plazo para el caso de que los interesados opten por apelar ante el juzgado federal de su domicilio; es decir, no establece el lapso dentro del cual deberán realizar dicha gestión.

Concretamente, el segundo párrafo del artículo 9º no dice en qué plazo podrá el interesado domiciliado en el interior del país optar por presentar el recurso ante el juez federal de su domicilio. Esta omisión podría salvarse agregando que ese plazo podrá ser de 10, 15 o 20 días.

Sr. Presidente (Silva). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cornaglia. — Señor presidente: en mi carácter de miembro informante de la Comisión

de Justicia, quiero hacer notar que si obráramos según la propuesta que con su fina sensibilidad formula el señor diputado por Santiago del Estero, podríamos introducir un elemento contrario a los intereses del beneficiario.

En efecto, si fijamos un plazo muy corto, realmente vamos a tener inconvenientes muy serios y en estos momentos la doctrina funciona del tal modo que ante apelaciones a resoluciones administrativas se considera que corren los términos en función de las notificaciones efectivas y del conocimiento real de esta circunstancia por parte de los beneficiarios.

En principio, el tema tendría que resolverse analógicamente en función de los términos que establece el artículo 9º en su primer párrafo, es decir, treinta días si el interesado se domicilia en la Capital Federal y noventa si se domicilia en el interior del país o en el extranjero. Esta es la situación contemplada.

Sr. García (C. E.). — El tema ha quedado perfectamente explicado y creo que esta aclaración habrá de servir para futuras interpretaciones de la norma.

Me declaro satisfecho con la explicación formulada.

Sr. Presidente (Silva). — Se va a llamar para votar.

—Se llama para votar. Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Silva). — Habiendo número en el recinto, se va a votar el artículo 9º.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 10.

Sr. Presidente (Silva). — En consideración el artículo 11.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Vanossi. — Señor presidente: en el debate en general adelanté los lineamientos de la observación que pienso realizar. De manera que me remito a los fundamentos expresados, ya que esta modificación pretende extender el control jurisdiccional, lo cual forma parte de las garantías de un estado de derecho.

Tal como el sistema ha funcionado hasta ahora la revisión judicial cubre nada más que la interpretación del derecho aplicable, quedando los hechos trabados en la instancia anterior, sin que el beneficiario pueda defenderse con amplitud en caso de verse perjudicado en el sostenimiento de su derecho. En efecto; el primer párrafo del artículo 11 dice así: "Interpuesto el recurso

de apelación y previa vista al ministerio público si la estimare necesaria, la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social resolverá de acuerdo a las constancias del expediente, sin perjuicio de las medidas que de oficio y para mejor proveer dispusiere”.

Pero ocurre, señor presidente, que con medidas para mejor proveer no basta; tampoco con la posible vuelta del expediente a la Caja, por la lentitud que ello acarrearía al trámite, debiendo tenerse en cuenta los fines asistenciales que suelen tener los beneficios previsionales.

Por lo tanto, propongo los siguientes agregados: entre las expresiones “resolverá” y “de acuerdo a las constancias del expediente”, debe insertarse “en cada caso sobre la procedencia del recurso”. Asimismo, entre el párrafo primero, que termina “... para mejor proveer dispusiere”, y el segundo que comienza “La sentencia de la cámara...”, debe agregarse: “El control judicial recaerá sobre los hechos de la causa y el derecho aplicable. En el supuesto en que las cajas nacionales de previsión social no hubieran sustanciado total o parcialmente la prueba ofrecida por la parte, la alzada judicial deberá disponer su producción.”

Para abreviar la discusión de este artículo, acompaño por escrito, en dos fojas, el resto de la fundamentación referente a las enmiendas que propongo, y solicito su inserción en Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Silva).— Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Cornaglia: Señor presidente: la comisión acepta la propuesta del señor diputado Vanossi, con la aclaración de que en ningún momento se quiso excluir las consideraciones de hecho en la alzada. Este es el propósito de los recursos o mecanismos procesales creados por este proyecto que vamos a sancionar. Pero sin ninguna duda, los aportes del señor diputado Vanossi aclararán y enriquecerán el texto del proyecto, no dejando ninguna duda acerca de que esta nueva cámara de apelaciones podrá considerar las cuestiones de hecho, lo que hasta ahora estaba vedado por una interpretación de la Corte.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Juan Carlos Pugliese.

Sr. Cornaglia.— Esta interpretación proviene del caso “López de Reyes contra Instituto Nacional de Previsión Social”, cuyo fallo tuviera una disidencia muy importante, fundada sobre

la inconstitucionalidad de este criterio, y que correspondiera al doctor Luis María Boffi Boggero. En tal sentido y con el mismo propósito, en nuestra proposición de normas ahora aceptamos tal pauta y la cristalizamos. De esta forma incorporamos las propuestas modificatorias que enriquecen el texto originario, y que a la vez responden al espíritu que guió a la autora del proyecto y a la comisión al producir el dictamen respectivo.

Sr. Presidente (Pugliese).— Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Cortese.— Señor presidente: consulto a la comisión acerca de si las medidas probatorias a producirse en sede judicial se encuentran limitadas a aquellas que no hubiesen sido aceptadas o realizadas en la instancia administrativa, o si es que se posibilita el ofrecimiento de nuevas pruebas en el ámbito judicial.

Sr. Presidente (Pugliese).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cornaglia.— Señor presidente: la norma está destinada a habilitar la consideración de todo lo que la causa, con el debido proceso garantido, permita evaluar; el sentido de aquella es el más amplio posible para que además de la búsqueda de la verdad en el derecho controvertido, se pueda alcanzar la verdad material para el otorgamiento de los beneficios previsionales respectivos.

Sr. Presidente (Pugliese).— Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Cortese.— Con la venia de la Presidencia, expreso que comparto los conceptos del señor diputado preopinante. A la vez, me permito invitar a la comisión a que repase los términos concretos de las modificaciones propuestas por el señor diputado Vanossi, pues se me ocurre que podría interpretarse que existen limitaciones para lo que serían pruebas no receptadas o producidas en la instancia administrativa.

Sr. Presidente (Pugliese).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cornaglia.— Señor presidente: trataré de contestar la observación formulada a la comisión.

En el texto propuesto por el señor diputado por la Capital se habla de la prueba ofrecida. Ello importa que el criterio es amplio y no limitativo. Entonces, se podrán probar los hechos ofrecidos y sometidos a prueba en el respectivo recurso. Este es el sentido que se le tiene que dar a la redacción propiciada, incluso a los fines de la interpretación auténtica.

Sr. Presidente (Pugliese). — No habiendo número, se llamará para votar y la Presidencia dispondrá nuevamente el respectivo pase de lista.

—Se llama para votar. Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a pasar lista.

—Se pasa lista, registrándose la presencia de 131 señores diputados.

—Se encuentran presentes al pasarse lista los señores diputados Abdala (O. T.), Aguilar, Alderete, Alende, Allegrone de Fonte, Alsogaray (A. C.), Alsogaray (M. J.), Alterach, Arabolaza, Austerlitz, Avalos, Azcona, Bakirdjian, Belarrinaga, Berri, Bianciotto, Bielicki, Bisciotti, Blanco (J. A.), Bonino, Botta, Briz de Sánchez, Brizuela (G. R.), Brizuela (J. A.), Bulacio, Cáceres, Caferri, Cafiero, Canata, Cangiano, Capuano, Castiella, Cavallari, Clérici, Contreras Gómez, Copello, Cornaglia, Cortese, Costantini, Curátolo, De la Vega de Malvasio, Del Río, Díaz, Díaz de Agüero, Di Cío, Domínguez Ferreyra, Douglas Rincón, Elizalde, Espinoza, Falcioni de Bravo, Fino, Figueras, Garay, García (C. E.), Gargiulo, Gay, Gerarduzzi, Ginzo, Golpe Montiel, Gómez Miranda, González (H. E.), González (J. V.), González Cabañas, Guzmán (H), Horta, Huarte, Iglesias Villar, Irigoyen, Jaroslavsky, Juez Pérez, Lamberto, Le-ma Machado, Lizurume, Llorens, Losada, Lugones, Manzano, Manzur, Martínez, Martínez Márquez, Masini, Massei, Matzkin, Maya, Milano, Monserrat, Moreau, Moreyra, Mothé, Mulqui, Natale, Nieva, Ortiz, Parente, Patiño, Pellin, Pera Ocampo, Pereyra, Pérez, Piucill, Posse, Puebla, Pugliese, Pupillo, Purita, Rapacini, Ratkovic, Rauber, Reynoso, Rigatuso, Rodríguez Artusi, Romano Norri, Ruiz, Salto, Sanmartino, Sarquis, Silva (R. P.), Solari Ballesteros, Spina, Srur, Stavale, Stolkiner, Storani (C. H.), Storani (F. T. M.), Stubrin (A. L.), Suárez, Terrile, Uilco, Usín, Vanossi y Vidal.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 11 con las modificaciones propuestas por el señor diputado Vanossi y aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 12 a 14.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 15.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cornaglia. — Señor presidente: simplemente quiero señalar que se ha deslizado un error material en la redacción de este artículo, por

cuanto donde dice "...el artículo 28 de la ley 19.346;...", debe decir "...el artículo 29 de la ley 19.346;..."

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 15 con la modificación indicada por el señor diputado por Buenos Aires.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 16.

—El artículo 17 es de forma.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda sancionado el proyecto de ley¹.

Se comunicará al Honorable Senado.

Se va a votar si se efectúa en el Diario de Sesiones la inserción solicitada por el señor diputado Vanossi.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se hará la inserción solicitada².

15

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL — MODIFICACION

(Orden del Día Nº 506)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación Penal ha considerado los proyectos presentados por los señores diputados Torcuato Fino y Jorge R. Vanossi sobre modificaciones al Código de Procedimientos en Materia Penal, y del señor ex diputado Canicoba sobre dictado de una ley que establezca el derecho de comunicar la detención a toda persona que fuera privada de su libertad ambulatoria por autoridad competente; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Modifícase el Código de Procedimientos en Materia Penal, ley 2.372 y sus modificatorias, en la siguiente forma:

1. Agrégase como segundo párrafo del artículo 4º el siguiente:

Artículo 4º (segundo párrafo). — Sin perjuicio de ello le hará saber por escrito, inmediatamente

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 6406.)

² Véase el texto de la inserción en el Apéndice. (Página 6420.)

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, en Buenos Aires, a los quince días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y seis.

JUAN C. PUGLIESE.
Carlos A. Bravo.
Secretario de la C. de DD.

28

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, disponga la realización de un estudio de factibilidad para la construcción de un puerto en la zona de Almanza y/o Bahía Brown, frente a Puerto Williams —Chile—, canal de Beagle por medio, en el territorio nacional de la Tierra del Fuego.

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, en Buenos Aires, a los quince días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y seis.

JUAN C. PUGLIESE.
Carlos A. Bravo.
Secretario de la C. de DD.

29

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, disponga a la brevedad, la rehabilitación del servicio ferroviario de trenes de pasajeros y carga entre las estaciones La Banda y Sol de Julio, provincia de Santiago del Estero.

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, en Buenos Aires, a los quince días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y seis.

JUAN C. PUGLIESE.
Carlos A. Bravo.
Secretario de la C. de DD.

30

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes, disponga la instalación de barreras de seguridad en el

paso a nivel sur y norte correspondiente al Ferrocarril Bartolomé Mitre de la estación ferroviaria de la ciudad de Fernández, provincia de Santiago del Estero.

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, en Buenos Aires, a los quince días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y seis.

JUAN C. PUGLIESE.
Carlos A. Bravo.
Secretario de la C. de DD.

31

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes proceda a la realización de forma directa o, por medio de contratos de locación de obras con empresas contratistas licitatorias, la repavimentación, ensanche y modificación del trazado actual de la ruta nacional 19, que une la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, con la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, capital de la provincia de Santa Fe, y se extiende hacia el oeste, hasta la ciudad de Córdoba, uniendo las capitales de las dos más importantes provincias del interior del país

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, en Buenos Aires, a los quince días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y seis.

JUAN C. PUGLIESE.
Carlos A. Bravo.
Secretario de la C. de DD.

32

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, proceda a disponer la reimplantación del servicio de trenes de pasajeros en el tramo comprendido entre las estaciones Río Cuarto y Venado Tuerto, tomando en consideración la resolución 260/85 de Ferrocarriles Argentinos.

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, en Buenos Aires, a los quince días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y seis.

JUAN C. PUGLIESE.
Carlos A. Bravo.
Secretario de la C. de DD.

B. INSERCIONES

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO VANOSSI

Fundamentos de la propuesta de modificación al artículo 11 del dictamen recaído en el proyecto de ley sobre creación de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social

Señor presidente:

El artículo 14 de la ley 14.236 en su actual redacción, sólo autoriza a interponer el recurso ante la Cá-

mara Nacional de Apelaciones del Trabajo, si se aduce inaplicabilidad de ley o de doctrina legal. La Cámara resuelve el recurso como tribunal de derecho decidiendo en primer término acerca de la procedencia del recurso y, en su caso, sobre la aplicabilidad de la ley o de la doctrina. Dicho artículo no habilita una instancia judicial plena.

En autos: "Nocefere de Caputo, Teresa", el procurador de la Corte, doctor Ramón Lascano, sostuvo que el artículo 14 viola los artículos 18 y 100 de la Constitución Nacional.

En autos: "López de Reyes, María Consuelo", el 25/8/959, el doctor Boffi Boggero (ministro de la Corte Suprema) fundó su voto disidente, sosteniendo que los procesos judiciales se integran, al menos en una instancia, con la faz de hecho y con la de derecho. Esa revisión ha de penetrar al examen de los hechos, aspecto esencial que no puede ventilarse solamente en la órbita administrativa sin que los principios (derecho de defensa y división de poderes) queden transgredidos.

Si bien la Sala III de la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sostuvo que la norma del artículo 14 no impone ninguna limitación arbitraria, porque el apelante siempre tiene expedita la vía de la acción "ordinaria" contra el acto administrativo, para hacer valer en forma exhaustiva y acabada sus derechos (tesis sostenida entre otros, en autos: Riera, Modesta s/pensión derivada, sentencia del 30/3/984; Ríos, Aída del Carmen, sentencia del 22/11/984). Este criterio sostenido por la Sala III, obliga al peticionante a recurrir a la vía ordinaria, con gran dispendio de actividad procesal, duración irrazonable del proceso y mayor costo. Cabe tener presente, que las prestaciones que se reclaman por esta vía, tienen carácter esencialmente alimentario, sustitutivo de salario que cubren necesidades de subsistencia. Una tramitación larga y costosa no se aviene con la finalidad del régimen previsional argentino.

Se han pronunciado ya a favor de la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 14.236, ya a favor de una revisión judicial amplia, diversos autores: Podetti, Humberto: *Los recursos judiciales en materia de previsión social*, Universidad de Tucumán, 1962; Allocatti, Amadeo en: *Tratado de derecho del trabajo*, dirigido por el doctor Deveali, tomo V, página 276, edi-

torial La Ley, 1972; Bidart Campos, Germán José: *El derecho constitucional del poder*, tomo II, página 294; Vanossi, Jorge: *Los llamados tribunales administrativos ante el derecho constitucional argentino*, E.D., 23/3/983; Wassner, Roberto A.: *Trámite y procedimientos judiciales en previsión social*, página 100, Abeledo-Perrot; Alice, Beatriz: *Principios que rigen el procedimiento previsional en sede administrativa. Apelación judicial: sus aspectos constitucionales*; E.D., tomo 39-827.

Si bien algunas salas de la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por medio de interpretación ampliaron el alcance del recurso (y permitieron sustanciar prueba omitida por el organismo administrativo) éstas fueron medidas de excepción. Se sostuvo que por vía de principio las medidas para mejor proveer no se avienen con la índole del recurso del artículo 14 de la ley 14.236 y que ellas proceden excepcionalmente para evitar la frustración ritual de la aplicación del derecho (confrontar dictamen del procurador general del trabajo, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, 30/10/79, Red. 5-1316).

En la actualidad, las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, llegan a acordar el beneficio, pero en otros casos devuelven el expediente al órgano previsional para suplir falencias, o para que dicte nueva resolución en base a las pautas fijadas. Esto da lugar a un procedimiento lento, que atenta contra la duración razonable del mismo, y contra las necesidades y urgencias del peticionante. Así, el expediente se devuelve a la comisión, ésta lo pasa a la caja, en la misma se sustancia la prueba y, ante omisiones o retardos en dicha sustanciación, o ante la denegatoria, se deben interponer nuevamente los recursos legales para que pasando por la comisión, se llegue por último nuevamente a la cámara.

Jorge R. Vanossi.